

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Nuevo-Leon por Eugenio Hernandez, contra los actos del C. Alcalde 1º de Linares, que lo juzgó y sentenció á la última pena.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que resuelto ya el punto sobre suspension previa del acto reclamado en este juicio de amparo, ha pasado al estudio del que suscribe para que estienda su pedimento en cuanto á lo principal.

Es el caso que Eugenio Hernandez fué encausado y sentenciado á la última pena por la autoridad política de la Ciudad de Linares, con arreglo á la ley de 3 de Mayo de 1873, á causa del asalto, robo y muerte perpetrado á principios del mes de Marzo último en el Rancho de "Caja Pinta," jurisdiccion del mismo Linares; y como la sentencia fué pronunciada fuera del término de quince dias que dicha ley fija para la terminacion del juicio, cree el quejoso que se le ha violado la garantía que otorga el art. 14 de la Carta fundamental de la República, y deduce de aquí que se le juzgó por un Tribunal especial, sin que por otra parte se le respetaran las garantías que le otorgan los arts. 20 y 21 de la misma Carta, por cuyo motivo ha ocurrido al Juzgado, quejándose de que el acto del C. Alcalde 1º de Linares viola en su persona las garantías consignadas en los arts. 13, 14, 20 y 21 de la Constitucion política de la República.

La citada ley de 3 de Mayo nada tiene de anticonstitucional; por que si es cierto que en la segunda parte del art. 1º constitucional se declara, que es un deber de todas las leyes y de todas las autoridades respetar y sostener las garantías que otorga la misma Constitucion, no lo es menos que hay casos escepcionales en que ella permite la suspension temporal de dichas garantías. Entre las

que menciona el art. 29 se encuentran todas aquellas que pongan á la sociedad en grave peligro ó conflicto, y bien se comprende que la frecuencia con que se cometian cuando la ley se promulgó, los delitos de asalto y plagio, no indicaban otra cosa sino que la sociedad se encontraba amenazada de muerte por una de las mas terribles plagas, como que cada dia tomaba mayores proporciones y se desarroyaba con mas fuerza el bandalismo entre nosotros.

La necesidad, pues, de asegurar los intereses sociales, hizo indispensable la promulgacion de la ley de 3 de Mayo citada; y supuesto que para su expedicion y promulgacion se observaron todos los requisitos que prescribe dicho art. 29, porque á mas de que se ve en ella el acuerdo del Ejecutivo y Legislativo, la suspension de garantías que contiene es por tiempo limitado, se hace por medio de una prevencion general y no se contrae especialmente á tal ó cual individuo, sino en general á todos aquellos que lleguen á cometer los delitos que menciona; y supuesto que tambien pasó por todos trámites demarcados por la misma Constitucion en los artículos relativos del párrafo 2º seccion 1ª título 3º, es consiguiente y lógico que la repetida ley de 3 de Mayo en nada pugna con los preceptos constitucionales, sino muy al contrario, se conforma en todo con ellos, aun en la parte que designa la pena de muerte para los reos de asalto y plagio, pues en ella no hace otra cosa que recordar que por el art. 28 de la Constitucion que lo subsistente para el salteador de caminos la espresada pena, y declarar que en dicho artículo está comprendido el plagio; infiriéndose de todo esto, la constitucionalidad de la ley.

Siendo esto así, y no negándose siquiera por el quejoso la imputacion que se le hizo ante la autoridad política de Linares de haber sido él uno de los autores del robo con asalto y muerte que se perseguia, es preciso discurrir, sin perjuicio de lo que á su tiempo se compruebe, bajo el supuesto de que Eugenio Hernandez es verdadero reo de ro-

bo con asalto, lo cual viene desde luego resolviendo gran parte de la cuestion principal, por que estando suspensas por la repetida ley de 3 Mayo, esclusivamente para saltadores y plagiarios, las garantías que otorgan los arts. 13, 19 parte del 19, y los 20 y 21 de la Constitucion federal de 5 de Febrero de 1857, y estando visto ya que Eugenio Hernandez debe ser considerado como reo de delito de robo con asalto, es indudable que para él estaban suspensas las garantías consignadas en los artículos que se acaban de citar, y que por consiguiente, no puede quejarse de su violacion, ó mejor dicho, no se le pueden haber violado, porque no gozaba de ellas.

Pero como Hernandez en su ocurso relativo, á mas de quejarse de la violacion en su perjuicio de los arts. 13, 20 y 21 constitucionales, se queja tambien de la violacion del 14, ya que acabamos de ver que no tiene derecho para reclamar por la violacion de los primeros, aun supuesta su violacion, veámos si le asiste alguno para hacerlo por la del último, ó en otros términos, examinemos si en efecto dicho art. 14 ha sido violado, pues la garantía consignada en él no se ha suspendido para ningun hombre, y por consiguiente todo aquel en cuyo perjuicio sea violada tiene un perfecto derecho para reclamar por ello.

Evidentemente la 1ª parte del citado art. 14 no fué violada en la persona del quejoso; porque consta que fué juzgado por un delito que cometió á principios del mes de Marzo último y con arreglo á una ley promulgada en Mayo del año pasado; por consiguiente, no puede en manera alguna decirse que sea una ley retroactiva, ni tampoco que no se haya dado con anterioridad al hecho que se perseguia.

En cuanto á que se haya aplicado ó no exactamente la ley, esto depende de la calificación que el Juez haya hecho de las pruebas del proceso, lo cual á él solo toca, y la Justicia Federal no puede entrar en apreciaciones sobre el particular, porque es facultad cometida solo al Juez de la causa.

Por último: aparece tambien que el Tribunal establecido previamente por la ley, que no es otro que la autoridad política, cuyos agentes hagan la aprehension, cuando esta no se verifica *infraganti*, como sucedió en el caso que nos ocupa, fué quien juzgó y sentenció al quejoso. Está visto en consecuencia, que tampoco el art. 14, ó sea la garantía que en él se consigna, ha sido violada.

Pero Hernandez en su escrito de queja manifiesta que hace suyo lo que haya alegado Austacio Rodriguez en el juicio de amparo que tambien este tiene promovido contra el mismo acto del O. Alcalde 1º de Linares, que lo juzgó y sentenció juntamente con E. Hernandez por complicidad en el mismo delito; y supuesto que el citado Rodriguez sostiene que por haberse fallado la causa despues del término que la ley demarca, el Juez no era competente, y por lo mismo que se le violó la garantía del art. 16 de la Constitucion, convendrá, antes de concluir, examinar este último fundamento del presente juicio de amparo.

Se dice que la autoridad política de Linares no era competente en el caso; pero se olvida, que segun el art. 3º de la ley de 3 de Mayo, cuando no se hace *infraganti* la aprehension, la autoridad, cuyos agentes la verifiquen, es la competente; sin que valga alegar el lapso del término que ella fija para la conclusion del juicio, pues esto no es sino caso de responsabilidad para el Juez que da lugar á ello, pero de ningun modo termina la jurisdiccion. Tal concepto no carece de fundamento; pues á mas de que entre las causas de incompetencia no se encuentra la de lapso de término, espresamente está considerado como caso de grave responsabilidad por la frac. 2ª art. 17 del Reglamento de 23 de Mayo de 1872, que se acompaña á la ley de la misma fecha, y que si no está vigente, si basta para poner fuera de duda que el excederse del plazo fijado por la ley, hace responsable á las autoridades; mas no incompetentes, supuesto, que la citada ley de 3 de Mayo no es sino la misma

de 23 del mismo mes de 1872, con muy ligeras modificaciones.

Ahora bien, reasumiendo lo expuesto, resulta que debiendo considerarse á Eugenio Hernandez como reo de asalto, no tiene derecho para quejarse de la violacion de las garantías que otorgan los arts. 13, 20 y 21 de la Constitucion federal, aun en el supuesto de que tal violacion sea un hecho; y que no se le han violado las consignadas en los arts. 14 y 16 de la misma Constitucion: en consecuencia, no estando comprendida su queja en la frac. 1ª del art. 101 constitucional, ni en la 1ª art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, no debe decretarse el amparo que solicita de la Justicia Federal.

Fundado en lo expuesto y sin perjuicio de rectificar su opinion en vista de las pruebas que se rindan, el Promotor concluye con la proposicion siguiente:

La Justicia de la Union no ampara ni protege al reo Eugenio Hernandez, contra el acto del C. Alcalde 1º de Linares, que lo condenó á muerte con arreglo á la ley de 3 de Mayo de 1873, por robo con asalto y muerte.

Monterey, Julio 11 de 1874.—*Lic. S. Roel.*

Es copia que certifica. Monterey, Agosto 20 de 1874.—*Lic. S. Roel.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Monterey, Agosto 17 de 1874. — Vista esta queja de amparo interpuesta por Eugenio Hernandez, contra los actos del C. Alcalde 1º de Linares, por los que lo juzgó y condenó á muerte, como reo de robo con asalto y homicidio, manifestando, segun el tenor de su escrito, que fueron violadas en su persona las garantías que le otorga la Constitucion general en sus arts. 13, 14, 16, 20 y 21; porque fué juzgado por un Tribunal especial, que no aplicó las leyes con exactitud al hecho; porque no es competente el Juez que dictó la sentencia y porque no se

tuvieron presentes las disposiciones expresadas en los arts. 20 y 21.

Visto el auto en que se mandó suspender la ejecucion de la sentencia de muerte; el oficio del C. Alcalde 1º de Linares, obsequiándolo; el informe rendido por la autoridad ejecutora, refiriéndose al que habia entendido en otro amparo solicitado por un correo de Hernandez y por lo que el Juzgado en obvio de dilaciones y de trámites, mandó agregar á este juicio copia del expresado informe; el pedimento fiscal en que dice: que no habiéndose violado las garantías que expresa el quejoso, se declare sin lugar el amparo; las pruebas rendidas por el C. Lic. Canuto Martinez, como defensor del querellante; el alegato hecho por el mismo defensor, haciendo mérito de las pruebas rendidas y solicitando se declare que procede el amparo; y todo lo demas que consta de autos, y

Considerando: Que por la ley de 2 de Mayo de 1873 fueron suspensas para los salteadores y plagiarios, las garantías que otorga la Constitucion general de la Republica en la primera parte de los arts. 13 y 19, y en los 20 y 21, haciéndose esto conforme á las facultades que tiene el Congreso de la Union en el art. 29 de la misma Carta fundamental; no pudiendo, en consecuencia, los que se hallen en ese caso, alegar tales garantías.

Que dicho alcalde 1º condenó á Hernandez conforme á la expresada ley de Mayo, que era la vigente cuando pasó el hecho, como reo de robo con asalto y homicidio en despoblado; teniendo esa sentencia la presuncion de ser justa y arreglada á derecho, mientras no se justifique lo contrario.

Que el quejoso no ha negado haber cometido el delito, limitándose á decir que no está bien justificado y que faltaron algunas diligencias que convenia se hubieran practicado; pero nada ha probado que lo exima del cargo que se le ha hecho, subsistiendo en su contra la presuncion de ser salteador, segun fué declarado por la expresada sentencia, sin que goce, por lo mismo, de las ga-

AMPARO.

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Yucatan, por el C. Domingo Evia, contra el Agente de la Hacienda pública de Izamal, que le cobra con apremio las contribuciones relativas á sus Haciendas «San Antonio» y «Buena-vista».

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El C. Domingo Evia ocurre á usted por medio del escrito que va al frente de estas diligencias, pidiendo que lo ampare y proteja contra los actos del titulado agente de la Hacienda pública del Estado, que sin tener este carácter legítimo le ejecuta al pago de unas contribuciones, adeudadas por sus fincas rústicas denominadas «San Antonio» y «Buena-vista» de la comprension del partido de Izamal, en donde ejerce sus funciones aquel empleado.

El recurso se funda en el art. 16 de la Constitucion de la República que el quejoso cree violado con los referidos actos, porque dice que no siendo legítima la autoridad de quien los ejecuta, á causa de derivarla del C. Tesorero general del mismo Estado cuyo origen tambien es nulo y vicioso, no puede tener la competencia que es necesaria para proceder constitucionalmente contra él.

Sin negar los hechos que se reclaman, el Agente de Izamal alega en su informe sobre ellos que no es procedente el amparo intentado "porque se funda únicamente en la ilegitimidad de las autoridades del Estado, sobre lo cual no tiene facultad de resolver ni usted ni ninguna otra autoridad federal, sin conculcar la Soberanía del Estado", que son las frases con que termina aquel documento informativo, y en las cuales se condensa la justificación de su autor. Mas está en un error al suponer que no hay poder federal que tenga derecho de conocer de los amparos intentados contra autoridades ilegítimas

porque ya la Suprema Corte de Justicia ha probado con razones clarísimas emitidas en diversas ejecutorias, que bien puede y debe, en uso de sus facultades constitucionales, otorgar los amparos que se pidan á la Justicia de la Union, aun cuando sea contra las autoridades usurpadoras, que nunca han de tener en la falsedad de sus títulos un *billet* de indemnidad que los haga de mejor condicion que las verdaderas y legítimas; y ejerce ese elevadísimo Tribunal de la Nacion tan augusto derecho, precisamente para hacer efectiva la Soberanía de los Estados, y evitar que en nombre de ella se consagre la usurpacion de sus falsos apóstoles.

Por lo que hace á Yucatan, es bien público, y suficientemente demostrado hasta en el seno mismo del Congreso de la Union, que el pueblo no ha sido consultado para darse los poderes legislativo, ejecutivo y judicial que de su voto libre debían emanar, y que hoy existen solo por el imperio de la fuerza física, á la cual deben su origen y apoyo. Si, pues, el Poder judicial de la federacion es competente para conocer y decidir de los amparos contra los actos de una autoridad incompetente de cualquier denominacion que sea, y siempre que violen las garantías individuales las legítimas y competentes; si el Agente de la Hacienda pública no es legítimo ni competente para cobrar las contribuciones que exige en Izamal por que deba su encargo al Ejecutivo del mismo, como confiesa en su informe, y que este no puede dar la legitimidad y competencia de que carece por haber tomado su título de Gobernador, de la minoría de la Legislatura, que no tenia facultad de conferirlo á nadie; y, á pesar de todo, el referido Agente ejecuta el pago de las contribuciones que motivan el presente juicio, y no hay duda que en la persona del quejoso se viola con esos actos la garantía individual otorgada en el art. 16 de la Constitucion de la República; con cuyo fundamento, del art. 101 del propio Pacto federal, y 1º, frac. 1º de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, el infrascrito pido á